

Dispatches **BOLIVIA COLOMBIA PALESTINE PARAGUAY PERÚ TURKEY VIETNAM**



Carmen Beatriz Ruiz

BOLIVIA

El difícil camino de la institucionalidad

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Bolivia ocupa el octavo lugar en el número de registros de feminicidios en la región donde al menos 12 mujeres son asesinadas por día, según cómputo del año 2014 ([ABI, agosto 2020](#)).

En Bolivia, de acuerdo con el conteo de la Fiscalía General del Estado, desde 2013 hasta febrero del año 2020 se registraron 701 feminicidios. En promedio, una mujer fue asesinada cada cuatro días. En 2015, 2016, 2017 y 2019, hubo un feminicidio cada tres días, mientras que en 2018 se asesinó a una mujer cada dos días. Durante los primeros meses de la pandemia y cuarentena, entre enero y agosto de este año, hubo 83 feminicidios ([Coordinadora de la Mujer, 2020](#)).

No es por falta de legislación. La primera Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica data de 1995 y su reformulación, la 348 o Ley Integral para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia, se promulgó en 2013. Bolivia ratificó los principales instrumentos internacionales de la materia. Se aprobaron planes que establecen derechos, obligaciones, servicios y coberturas en los niveles municipal, departamental y nacional. Todo en gran medida por el impulso de ONG de mujeres y el apoyo de agencias de cooperación internacional, principalmente.

Sin duda ha habido avances, pero los servicios siguen siendo insuficientes en número y deficientes en su calidad; bajo porcentaje de casos llegan a la justicia y menos aún se resuelven. Y la cifra de los casos registrados sigue subiendo. Más que esfuerzos sobre el papel se requieren recursos efectivos y una institucionalidad sólida.

En ese marco, políticos de oposición y analistas políticos claman, sin resultado, porque se construyan alianzas y acuerdos de gobernabilidad para un necesario acuerdo nacional mínimo entre los tres niveles de gobierno y entre los poderes ejecutivo y legislativo, que desde noviembre del año pasado se mantienen en una relación duramente contaminada por la confrontación entre el gobierno y el MAS.

COLOMBIA

Lideresas en Colombia: victimización y resistencia

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó para el año 2019 el asesinato de 15 mujeres defensoras de derechos humanos y reportó un incremento del 50% en esta cifra con respecto al año 2018 (ONU DDHH, 2020). Estos datos se enmarcan en un contexto de más larga duración –de 2013 a 2019– en el cual se reportan 84 casos de asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos y 1 336 hechos de violencia cuyos periodos de mayor intensidad corresponden a los propios del conflicto armado. Llama la atención que en su gran mayoría (85%) se trata de amenazas orientadas a infundir miedo y minar el ejercicio social o político y que los liderazgos más visiblemente afectados son los de mujeres indígenas, comunitarias y campesinas (Programa Somos Defensores, 2020).

Así las cosas, el ejercicio del liderazgo de las mujeres en Colombia constituye una actividad profundamente riesgosa que se origina en y complejiza las brechas de género y los impactos diferenciales y desproporcionados del conflicto armado sobre las mujeres y sobre las comunidades étnicas.

Mujeres como Francia Márquez, lideresa defensora del medio ambiente y de los derechos humanos; o como Aida Quilcué, destacada dirigente indígena de la comunidad Nasa al suroccidente de Colombia; o como Isabel Zuleta, reconocida dirigente del movimiento Ríos Vivos; son ejemplos destacados del liderazgo femenino que resiste a la ola de violencia que hoy vive Colombia.

Cientos de mujeres como ellas, dirigen procesos sociales que evitan el avance del paramilitarismo en los territorios ancestrales de las comunidades negras e indígenas, al tiempo que evitan la destrucción de la naturaleza realizada por empresas –legales o ilegales– dedicadas al extractivismo minero-energético.

Pero no son solo las lideresas las que juegan un papel importante en los movimientos de resistencia. Las activistas menos visibles son las que persisten, las que insisten, las que –en general– garantizan la pervivencia de esos movimientos, aun cuando la violencia arrecia.

Sin mujeres no hay resistencia ni victoria, eso lo tienen claro los movimientos sociales.



Paola Jiménez



César Torres

PALESTINE

The effects of administrative detention on Palestinian women

Taghrid Al-Akhras, 41 years old, is one example of many Palestinian women who suffer psychological and physical violence under Israel's 53-year occupation of Palestinian territory. She is the wife of Maher Al-Akhras, an administrative detainee from Jenin, West Bank, who was on a 103-day hunger strike to protest his arbitrary arrest. The strike brought him close to death until he suspended it on November 6, 2020, after reaching an agreement with the Israeli Prison Authority for his release on November 26, 2020. In a grave violation of international law (P.L.O. Negotiations Affairs Department, March 2018), Israel currently holds 350 administrative detainees, among them women, including a mother of a four year old girl. Administrative detentions are arbitrary as the detainee is not charged and there is no trial process. In all, Israel holds 4400 Palestinians as prisoners, including 39 women, 12 of whom are mothers (Wafa; 2020, October 14).

Describing the horror that was felt by her six children, Taghrid tells me the Israeli army broke into their house in the middle of the night when they arrested her husband. In Maher's absence, and not being able to see him for months, Taghrid has faced difficulties taking care of her children alone. Deprived of his care and affection and traumatized by the fear of Maher's possible death, Israel also denied the children the right to visit their father for 91 days.



Photo courtesy of Al-Akhras family



Samar Awadallah

Hunger strikes are a practice used by Palestinian prisoners to defend their human dignity and to convince Israeli forces to respect their very fundamental rights under international law. These strikes are a method of non-violence resistance to protest injustice, especially in the absence of international intervention.

Taghrid herself went on a hunger strike for five days in October, asserting that she is not the only victim of Israeli violence. There are hundreds of women who suffer from repressive measures, including military checkpoints, home demolitions, detention, and extrajudicial killings. The experience of Maher's arrest made Taghrid feel the ordeal of female prisoners, especially mothers and the significant pain they endure being separated from their children. Taghrid decided to go on the hunger strike to voice protest against oppression, show solidarity with her husband and all female prisoners, and deliver a message to the world to take concrete actions towards releasing all the Palestinian prisoners, including women and children.

PARAGUAY

Violencia de género y fundamentalismos religiosos en América del Sur

En este 25 de noviembre cabe recordar que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de 1979, no incluyó en su texto la problemática de la violencia contra las mujeres. Recién en el año 1994, la Convención de Belém Do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, brindó a la región de América Latina y el Caribe un instrumento normativo que define lo que se entiende por violencia contra las mujeres y niñas, describe los distintos tipos de violencia y brinda aportes hacia políticas públicas sobre violencia doméstica, intrafamiliar y de género. La IV Conferencia mundial sobre la Mujer en Beijing, China, en 1995, incorporó, entre una de sus 12 esferas de actuación para los gobiernos del mundo, la esfera de la violencia. Posteriormente, las revisiones de la Plataforma de Acción de Beijing +5, +10, +15 y +20 posibilitaron avanzar hacia la no violencia por razones de sexo-género. En los años 2000, no obstante, el incremento de fondos para género dentro de las Naciones Unidas, las políticas sobre violencia contra las mujeres continuaron tratándolas como víctimas y subordinadas dentro de políticas de "familias".

Enseguida se fue gestando una oposición radical de grupos fundamentalistas religiosos contra los feminismos y contra los colectivos LGBTIQ+. Este movimiento global, estructurado por sectores de las iglesias protestantes y católicas, brindó cada vez mayor presupuesto para candidaturas confesionales en la región, donde sobresalen Trump en Estados Unidos, el militar pentecostal Jair Bolsonaro en Brasil, Francisco Alvarado en Costa Rica, Jimmy Morales en Guatemala, u Horacio Cartes en Paraguay; contrarios a entender o abordar las violencias contra las mujeres y población LGBTIQ+.

¿Será que el feminismo ha colocado en el espacio público las violencias contra las mujeres y niñas, las violencias contra población LGBTIQ+, las violencias contra el colectivo Trans, la violencia sexual, el *embarazo-violación de niñas*, la violación de niños/as por religiosos y por eso son acusadas y perseguidas hoy de manera violenta, en una reacción inquietante? Quizá las feministas han puesto el dedo en la llaga de las más duras violencias del patriarcado.

PERÚ

La política pública para la igualdad de género y la gestión municipal

La Política Nacional de Igualdad de Género en Perú identifica como problema público la discriminación estructural hacia las mujeres por las siguientes causas: a) normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres; b) asignación desigual de roles entre hombres y mujeres; y c) patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Se complementa con otros instrumentos como el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género y la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que resaltan formalmente el enfoque de género en las políticas públicas. Desde ese marco nacional, ¿qué han venido haciendo las municipalidades para el cierre de las evidentes brechas de género?



Carmen Colazo



Carlos Herz

Algunas municipalidades han promulgado ordenanzas (normas locales) que transversalizan el enfoque de género, incluyendo acciones para la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. Dichas ordenanzas proponen la constitución de instancias de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Sin embargo, muchos de esos instrumentos todavía no poseen reglamentos ni cuentan con planes de trabajo; no han elaborado indicadores sobre la situación de violencia para que sean incluidos en los planes de desarrollo territoriales concertados, en los presupuestos participativos y en los planes operativos institucionales, elementos que permitirían internalizar el enfoque de género en la gestión de las intervenciones y proyectos municipales.

Pero, en lo sustancial, para lograr superar estas brechas más allá de la normativa favorable, urge la sensibilización de la opinión pública y el desarrollo de capacidades en las autoridades y funcionarios a todo nivel para internalizar esos enfoques y para que los apliquen con convicción. De manera similar, se requiere asignar mayores presupuestos para las gerencias/áreas sociales y de derechos de las mujeres, promover su participación ciudadana, y crear espacios para la articulación de instituciones públicas y de la sociedad civil en la planificación del desarrollo local con enfoque de género.

Solo en el sur andino del Perú (Cusco, Puno y Apurímac) las denuncias de violencia contra las mujeres se han incrementado más del 200% respecto al año pasado ([Wayka, 26 agosto 2020](#)). Por lo tanto, los retos siguen siendo urgentes, particularmente si se pretende construir gobernanza desde lo local.



Zeynep Baser

TURKEY

Istanbul Convention on preventing and combating VAWG

The continuing attacks against the Istanbul Convention reached an alarming new low during the summer of 2020 ([Kepenek; 2020, August 17](#)). The latest round of the attacks started in July when high-level officials suggested that the Turkish government consider withdrawing from the Convention ([Duvar, 2020, July 2](#)). The suggestion was met with strong opposition from women's rights activists across Turkey. The former president of the Convention's monitoring body, the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), Feride Acar, warned that withdrawal would not only reverse the gains made in ending VAWG but would also represent a severe regression in terms of human rights and democracy ([Kepenek; 2020, July 7](#)).

Amidst the activists' struggle to uphold the Convention, the brutal murder of a 27-year-old woman by her boyfriend in late July fueled further outrage across the country ([The Guardian; 2020, July 13](#)). In the following days women took to streets in Turkey's metropolises, while social media campaigns with hashtags #İstanbulSözleşmesiYaşatır (Istanbul Convention saves lives), #İstanbulSozlesmesiniUygula (Enforce the Istanbul Convention), and #challengeaccepted gained the support of hundreds of thousands in a matter of days. The latter campaign became a global trend.

Opposition party leaders, bar associations and other activists also supported the Convention (BIA News Desk; 2020, [July 14](#) & [August 20](#)). More importantly, in early August additional conservative and/or pro-government women's organizations voiced their clear support for remaining within the Convention, although they clarified the Convention does not promote homosexuality and they were not defending LGBT rights (BIA News Desk; 2020, [August 3](#) & [August 8](#)). This conservative support for the Convention sparked a harsh debate with individuals that supported withdrawal from the Convention and demonstrated that the government does not have a support base among its female constituents for a roll-back ([BIA News Desk; 2020, August 7](#)). The ruling AK Party was expected to announce its decision on the Convention in August; however, as of mid-November, no decision had been announced.

Turkey signed the Istanbul Convention in 2011 and it entered into force in 2014 after the required amendments were made to national legislation. Despite the lack of political will for its full and effective implementation, the Convention remains one of the most effective instruments for the prevention of and protection of women against VAWG as well as prosecution of perpetrators.

The efforts to withdraw Turkey from the Convention were initiated in 2019 by small but powerful conservative lobby groups, on the grounds that it poses a threat to 'Turkish family values' and 'encourages immoral lifestyles;' arguments also used by government officials ([BIA News Desk; 2020, August 24](#)).

Conversely, according to a recent reliable nationwide survey, only seven percent (mostly men) of Turkey's population is in favor of withdrawing from the Convention ([BIA News Desk; 2020, September 2](#)). Contrary to its government, society is undergoing surprisingly positive shifts in socio-cultural norms and attitudes regarding violence against women.

VIETNAM

Domestic violence against women on the rise

Domestic violence against women in Vietnam remains a painful social problem that causes serious consequences to women's economic development and physical and mental health. It is estimated that the economic damage caused by domestic violence to the Vietnamese economy is equivalent to 1.8% of GDP ([Estimating the cost of domestic violence against women in Viet Nam, 2013](#)).

The General Statistics Office of Vietnam conducted a National Study on Domestic Violence against Vietnamese women in 2010 and again in 2019. The situation of violence against women remains alarming after nearly 10 years, despite many efforts of the Government, international organizations, NGOs and other stakeholders.

The 2010 report found that 58% of ever-married women had experienced at least one of three forms of violence (physical, sexual or emotional) by their partners in their lifetime. Nine years later, the percentage of abused women by their partners is still high, in fact it increased to 62.9% ([National Study on VAW in Viet Nam, 2019](#)). In Vietnam, most women experience violence from their husbands, followed by any other male family member. Furthermore, women with disabilities are still more likely to experience various forms of partner violence than women without disabilities.

Although, in 2019 women reported less physical violence by their husbands, the proportion of women who reported sexual violence increased, especially among young women aged 18-24 years. This rise in sexual violence could be the result of not only an increase in violence itself but also a result of a social change in which women are more open to talking about sexual violence. In Vietnam, 4.4% of women who were sexually abused were below the age of 15 when the incident occurred, and sexual abuse was committed mainly by non-family males. Violence against women in Vietnam remains hidden. Both in 2010 and 2019, half of women who experienced violence did not tell anyone about the incident and the vast majority did not seek any help from public services.

Children living in violent environments are also the victims. Among women who experienced physical violence by their husbands, 61.4% reported that their children have witnessed or heard of the incident. More specifically, women who experienced physical and/or sexual violence from their partner reported that their children often have behavioral problems. Interestingly, there is evidence of an intergenerational cycle of abuse. For example, if a woman has been the victim of partner violence, the husband's mother was more likely to have been beaten or the husband himself was beaten as a child.

Gender inequality in the family and society remains the main cause of domestic violence in Vietnam. Communities, authorities, and mass organizations still lack interest in ending domestic violence because it is considered a private matter. Protective measures and service facilities to assist victims of gender-based violence are still not available in many localities.

Not all news about domestic violence in Vietnam is discouraging. The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs is proposing to amend laws, policies and strategies to prevent and respond to violence against women in the years to come. In particular, the agency is developing the National Strategy on Gender Equality for the period 2021-2030 and the Scheme on prevention and response to gender-based violence for the period 2021-2025. The Government of Vietnam is also implementing many communication solutions to raise awareness on gender equality and eliminate gender-based violence across the country.



Chi Pham



Photo: Chi Pham

Opinion

QUESTIONS FROM JGG | ANSWERS BY MINJA DAMJANOVIC



Minja Damjanovic —
EVAW Program Manager
in UN Women Bosnia and
Herzegovina. She has 15
years of experience working
in international civil society
organizations assisting
governments to strengthen
their prevention and
response systems.

JGG: How can civil society ensure that legislation is consistent with international obligations to end VAWG and fully implemented?

Minja Damjanovic: One of the ways that civil society can ensure that legislation is promulgated and implemented in a manner consistent with international obligations to end VAW is by designing new innovative models and tools for protection, drawing from international standards. By doing this, CSOs become leaders in designing, testing, advocating for and monitoring the use of services and models of protection that are women centered and reflect highest standards of response to survivors.

In developing new models of protection CSOs add value by thinking outside the box, drawing from regional/global best practices and by working closely with the government to ensure consistent implementation and sustainability of tested models through their adoption as legislation. One example from Bosnia and Herzegovina is particularly illustrative of this process.

In 2007, women CSOs organized a first CSO-led gender responsive budgeting initiative to ensure public funding of shelters for domestic violence survivors. By expanding on the standards of Council of Europe and using acquired knowledge on international obligations and available tools to end VAW, experts from CSOs developed and proposed a model for financing the shelters from targeted public budgets, developed policy solution and legal amendments and advocated for their adoption by the parliament. Codification of this model by domestic legislation was critical for ensuring consistency with international obligations, in an environment where funding for shelters was completely unavailable. By becoming specialists in international standards, CSOs positioned themselves as valuable partners to the government in design of the legislation, actors responsible for the implementation as well as watchdogs in the overall monitoring of its full implementation.

JGG: What are the most effective governmental interventions for the prevention of VAWG that you have observed?

Minja Damjanovic: Effective prevention of VAWG requires a comprehensive mobilization of actors, institutions and communities within a country or a territory. In Bosnia and Herzegovina, commissioning a study that estimated the cost of domestic violence was one of the most effective governmental interventions to mobilize actors and institutions around VAWG prevention. The study, published in 2019, uncovered the scope of the issue by assigning it financial value and indicated areas of intervention for strengthening of marginalized and underfunded prevention programmes and policies.

First and foremost, evidence of the high cost of VAWG responses provided much needed impetus for higher investments in prevention. And promptly in 2019, evidence-based advocacy started to show promising results as key governmental institutions began to change their approach towards prevention interventions. This was particularly visible with regard to professional development of service providers responsible for VAWG prevention and response; such training had been underfunded, ad hoc and non-standardized.

The work undertaken by the Ministry of Interior is particularly illustrative of this changed approach. By mid-2021, Ministry of Interior (MoI) plans to have standardized mandatory training for serving officers and cadets in police academy, as well as tools to monitor the quality of police response in preventing and addressing VAWG. With this MoI will have the needed tools to regularly monitor, update and enhance its role in preventing and responding to VAWG.

Opinión

PREGUNTAS DE JGG | RESPUESTAS DE ADRIANA LOCHE



Adriana Loche — Doctora en Sociología por la Universidad de Sao Paulo, con más de 15 años como especialista en prevención de la violencia y desarrollo internacional.

JGG: ¿Qué tipo de servicios o respuestas ha observado que sean las más efectivas para tratar a personas perpetradoras de la violencia?

Adriana Loche: Tradicionalmente, las repuestas para el tratamiento de personas perpetradoras de violencia recaen básicamente en el sistema de justicia formal, a través de sanciones penales. Sin embargo, aunque necesarias, estas medidas solo atienden a una parte del problema que es responsabilizar a las y los agresores por sus actos. Las respuestas más eficaces son las que abordan, de manera comprensiva, las motivaciones que llevan a la persona a cometer un acto de violencia. Tomando como ejemplo la violencia familiar, se puede decir que uno de los principales factores de riesgo es el consumo abusivo de alcohol. En estos casos, intervenciones breves y tratamiento a más largo plazo para los adictos, mediante terapias cognitiva-conductuales, han demostrado eficacia en la disminución de diversas formas de violencia que se manifiestan en el ámbito familiar, como el maltrato infantil y la violencia de pareja.

Otra medida que ha demostrado ser efectiva es la regulación de la venta de alcohol, a través de la reducción tanto de horas/días en los que se puede vender como en el número de puntos de venta. Esta respuesta, adoptada en muchos países como Brasil, Colombia y en algunas comunidades aborígenes de Australia, ha contribuido a la disminución no solo de la violencia en el ámbito familiar sino también la comunitaria. Pero, lo más importante, es entender que no hay una respuesta única porque la violencia es multicausal. Las respuestas más efectivas tienden a ser aquellas que combinan tratamiento individual y cambios en las normas sociales y culturales; por ejemplo, el trabajo con varones en el desarrollo de nuevas masculinidades.

JGG: ¿Cómo pueden los líderes religiosos trabajar con las instituciones de gobierno o la sociedad civil para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas?

Adriana Loche: Este es un tema bastante complejo porque las religiones, por doctrina, tienden a ignorar o subestimar algunas pautas importantes para prevenir la violencia contra las mujeres, como, por ejemplo, el tema del aborto y del abuso sexual entre parejas. Sin embargo, los líderes religiosos podrían actuar como voceros divulgando que la violencia contra mujeres y niñas es inaceptable, y que hombres y mujeres son iguales en derechos. Y aquí me gustaría rescatar dos experiencias, ambas de la iglesia católica. En 1990, la Confederación de Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en portugués) lanzó una campaña de fraternidad, intitulada Fraternidad y Mujer. Al difundir el mensaje de que *hombres y mujeres son en conjunto la imagen de Dios* se intentaba concientizar sobre el tratamiento desigual entre hombres y mujeres, en especial en relación al goce de los derechos. Treinta años después, en su homilía del primero de enero de 2020, el Papa Francisco denunció el abuso contra las mujeres en las sociedades modernas y pidió el fin de la explotación femenina, diciendo que *“toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios”*. De esta forma, pueden, a través de su fuerte presencia en los medios de comunicación, evocar a sus fieles a recusar las actitudes y las normas de género y sensibilizar a toda la sociedad sobre el comportamiento violento hacia las mujeres y cómo prevenirlo.

Consultancies

JGG NEEDS CONSULTANTS IN SPECIFIC GOVERNANCE SUB-SECTORS

If you have technical experience in the following areas please send your CV to cv@justgovernancegroup.org:

- » Transparency and anti-corruption
- » Climate change (human rights and gender impacts)
- » Humanitarian crises and disaster risk reduction

We especially welcome consultants with experience in MENA, Asia Pacific, and South East Asia.

Proceso de Aprendizaje en Gestión basada en Resultados

Un equipo de consultores de JGG, conformado por Kimberly Inksater, Carmen Ruiz y Otto Valle, se encuentra facilitando un proceso de aprendizaje sobre gestión basada en resultados al personal de una institución interamericana. El equipo consultor utiliza tanto la comunicación sincrónica y asincrónica, que combina métodos activos asincrónicos con las nuevas tecnologías de información, para continuar trabajando en el fortalecimiento de capacidades en tiempos de la pandemia. La capacitación está siendo desarrollada gracias al apoyo de la Embajada Real de Noruega en México.

Research on Women's Political Empowerment

JGG was contracted by DAI, under the Expert Advisory Call Down Services (EACDS) Lot D framework (EACDS Lot D is implemented by a consortium, led by Oxford Policy Management, of specialist partners providing call-down consultancy and rapid response technical assistance to the UK Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO)) to analyze women's political empowerment as part of an annual and mid-term review of the Inclusive and Accountable Politics Programme (IAP) implemented by the Westminster Foundation for Democracy and funded by the FCDO. The IAP programme aims for greater access and inclusion of women and under-represented groups in formal and informal political processes as well as improved accountability and transparency. Kimberly Inksater conducted online data collection with programme implementers and women politicians and political activists in various countries including Nepal, Kyrgyzstan, Indonesia, The Gambia, Uganda and Malawi and women political leaders engaged in regional initiatives in the Middle East and Africa.

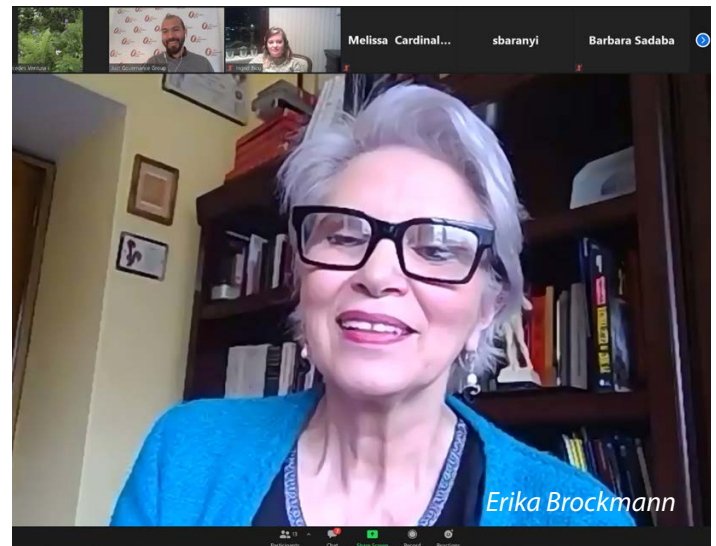
Inclusive Governance Monitoring and Advisory Services in Myanmar

JGG will provide monitoring and advisory services to Global Affairs Canada for the "Strengthening Federalism and Inclusive Governance in Myanmar Project" and other governance programming in Myanmar (Burma). The project, implemented by the Forum of Federations focuses on strengthening capacity, awareness, leadership and dialogue for implementing gender-sensitive federal policies and legislation and strengthen the participation of women as decision-makers in decentralization. This monitoring and advisory work will extend until 2025.

Knowledge Sharing

Elecciones complejas y Covid-19

JGG en colaboración con la Escuela de Desarrollo Internacional y Estudios Globales de la Universidad de Ottawa realizaron una mesa redonda más. Esta vez se trató de una reflexión virtual sobre los efectos de la pandemia en elecciones complejas. La presentadora Ingrid Bicu, especialista en comunicación estratégica y elecciones de IDEA Internacional, aportó hallazgos y lecciones a nivel global. Por su parte, la analista política y exsenadora Erika Brockmann, analizó el caso de Bolivia. La audiencia reflexionó sobre el posible uso de la pandemia con fines políticos, la tendencia de la participación electoral en tiempos de pandemia, los contagios de Covid-19 en las elecciones y el papel de los liderazgos políticos como modelo de comportamiento responsable frente a la pandemia.



New JGG Administrator

JGG welcomes Tina Chandler as the new JGG administrator. She will support all administrative aspects of consultancy, knowledge, and network/corporate functions. Tina has previous administrative and coordination experience within the Ombudsman's Office of the Department of Canadian Heritage. She was also self-employed, offering administrative support to small businesses and non-profits. More recently, she worked in-flight for Air Canada as a Service Director.

Just Governance Group

Contact Information

Kimberly Inksater, Director: kj.inksater@justgovernancegroup.org

Tina Chandler, Administrator: administration@justgovernancegroup.org

Carmen Beatriz Ruiz (Bolivia): cb.ruiz@justgovernancegroup.org

Skype: JustGovernanceGroup

Tel: 613-729-5612

info@justgovernancegroup.org



justgovernancegroup.org